

comprendido José Victoriano por razón del hecho criminal de que se le acusa.

Considerando: que la ley de 3 de Mayo del año pasado suspendió solamente para los saltadores y plagarios las garantías de que tratan los artículos 13, 19, 20 y 21 de la Constitución federal.

Que el delito perpetrado por José Victoriano, no es el de asalto como ha creído el Gefe político de Tehuacan; pues según aparece de las constancias de la causa instruída contra aquel, caminaba en compañía de su mujer, de María Jacinta y de Pedro Trinidad Morales, con quien la mujer de Victoriano tenía relaciones ilícitas, cuando procedió á dar muerte á Morales, instigado por las ociosas y por su asistencia en acompañarlas, á pesar de haberle indicado que se volviera; cuyas circunstancias no permiten considerar como un asalto este acto criminal.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los artículos 14 y 101 de la Constitución federal, se decretar que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 11 de Marzo del presente año, que declaró: que la Justicia de la Union ampara y protege á José Victoriano, contra los procedimientos del Gefe político de Tehuacan, que por delito de homicidio lo ha juzgado y sentenciado á sufrir la pena de muerte aplicándole la ley de 3 de Mayo del año pasado, quedando consignado por este delito á la autoridad judicial respectiva.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—

Ignacio M. Altamirano.—*Simón Guzmán.*—*Pedro Ogazon.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Setiembre 2 de 1874.—*Enrique Landa.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Tlaxcala por el C. Sabino Maraver, contra el Ayuntamiento de Huamantla Juarez, que lo despojó del uso de una merced de agua que disfrutaba por contrato celebrado entre el padre del quejoso y el mismo Ayuntamiento.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez primer suplente de Distrito.

El Promotor dice: que habiendo interpuesto el C. Sabino Maraver el recurso de amparo contra el patriótico Ayuntamiento de Huamantla por violacion de garantías, solicitó ante todo la suspension del acto reclamado, á cuya pretension me opuse, por creer que no habia violacion alguna de garantías, pero sobre todo porque no era necesario, como así lo declaró V. en su sentencia fecha 14 del actual. Despues, en cumplimiento del art. 92 de la ley de 20 de Enero de 1869, mandó V. informarse con justificacion la autoridad ejecutora del acto reclamado; y hecho, se mandó correr el traslado respectivo y para evacuarlo, dió: que reproduzco las razones expuestas en mi pedimento de fecha 5 de Diciembre del año próximo pasado, y ademas añadí: que no se ha violado la garantía que otorga el art. 49 de la Constitución general, porque no se le impide abrace la industria de baños que tiene establecida, sino lo que se le prohíbe es que tome la agua de la cañería que abastece las fuentes públicas, pudiendo hacer uso, si quiere, de la agua que va por la ca-

ñería de las mercedes, y esta prohibición se le hace por acuerdo del P. Ayuntamiento ó lo que es lo mismo, por resolución gubernativa, puesto que el seguir haciendo uso del agua de la cañería que abastece las fuentes públicas, ofendía los derechos de la sociedad, es decir, de los vecinos de Huamantla, por cuyo motivo el suscrito cree que no hay violación del art. 49 de nuestra Carta fundamental. Tampoco hay violación del art. 13, porque no ha sido juzgado por leyes privativas, ni por tribunales especiales; no lo primero, porque de conformidad con la cláusula sexta del contrato celebrado por el Sr. su padre, la corporación dispuso se le quitase la agua de una cañería y se le diese de otra, con cuya disposición debió estar conforme el C. Maraver puesto que así estaba contratado; no lo segundo, porque la medida dictada por el P. Ayuntamiento no es sentencia, ni menos pronunciada por tribunal especial, sino tan solo resolución gubernativa, la que estaba en su derecho para dar, puesto que estaba convenido se sujetaría Maraver á todas las disposiciones posteriores relativas á esta clase de concesiones.

No se ha violado la que otorga el art. 14, porque no ha sido juzgado ni sentenciado por ley posterior ó por tribunal establecido posteriormente; pues repito, que en virtud de la cláusula sexta de su contrato, dictó el P. Ayuntamiento su resolución gubernativa, por la cual se le prohibió usar del agua de una cañería, dándole licencia usara de la de la otra cañería.

No se ha violado la del art. 16, porque aun cuando no hubo mandamiento escrito, esto fué en virtud de que parte de la misma autoridad se presentó á notificar la resolución que había dictado toda la Corporación, y por lo mismo, siendo ella misma la que se presentó á notificarla, no tenía necesidad de haber puesto mandamiento escrito que fundara y motivara la causa legal del procedimiento, pues consta que la tarde del día 11 de Octubre del año próximo

pasado, el C. Regidor Olivares, le hizo saber personalmente el acuerdo dictado por el Ayuntamiento, y por tanto no ha habido violación de la garantía que otorga el art. 16.

Menos se ha violado el art. 17, porque estando en sus facultades, es decir del Ayuntamiento, dictar las medidas ó resoluciones que le parecieren convenientes para esta clase de mercedes de agua, y mas principalmente en el caso que nos ocupa, puesto que así estaba convenido expresamente en la cláusula sexta del contrato, no ejerceó el Ayuntamiento violación para reclamar su derecho, sino que siendo como es autoridad y estando en su derecho, no reclamó sino ordenó conforme á sus facultades, que no se tomase la agua de una cañería sino de la otra, por lo que tampoco hay violación del art. 17.

Por lo que mira á la garantía que concede el art. 21 tampoco se ha violado, porque la resolución de que no use de una cañería y sí de la otra, no es pena, pues esta puede definirse, el castigo que se impone al delincente por el delito que perpetró, y al C. Maraver se le ha privado uso del agua de una cañería no como castigo, sino en beneficio del público, por la escasez que con esta concesión resentía todo el vecindario, pues segun dice el P. Ayuntamiento en su informe, no alcanzaba la que dejaba Maraver para abastecer las fuentes públicas, y por eso en beneficio público, el Ayuntamiento acordó la prohibición hecha á Maraver, mas nunca como pena; y por lo mismo no habiendo impuesto pena alguna, no se ha violado la garantía que otorga el art. 21.

De lo expuesto se deduce, que no ha habido violación alguna de las garantías que otorgan los arts. 49, 13, 14, 16, 17 y 21 citados por el quejoso, y por cuya razon este ministerio concluye pidiendo se sirva V. decretar: que la Justicia federal no ampara ni protege al C. Sabino Maraver, contra la resolución dictada por el P. Ayuntamiento de Huamantla, en virtud de la cual

se le prohibió usara del agua que venía por la cañería que surtía su casa de baños, conocida con el nombre de "Baños de Neptuno," mandándole usara del agua de la cañería de las mercedes.

Tlaxcala, Febrero 25 de 1874.—*Lic. José Cirilo Alva.*

Sentencia del U. Juez de Distrito.

Tlaxcala, Marzo 2 de 1874.—Visto el escrito presentado por el C. Sabino Maraver el día 29 de Noviembre del año próximo pasado, en que con fundamento de la fracción 1ª del art 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, interpuso recurso de amparo contra el P. Ayuntamiento de Huamantla Juarez, quien de propia autoridad lo privó del goce de una merced de agua que por contrato de locacion ó arrendamiento disfrutaba, creyendo en dicho acto violadas en su persona las garantías que al hombre otorga la Constitucion general de la República, en sus arts. 4, 13, 14, 16, 17 y 21.

Visto el informe rendido por el expresado Ayuntamiento de Huamantla; lo pedido por el C. Promotor fiscal; las constancias que el quejoso acompañó al escrito en que pide el amparo; la citacion para sentencia y cuanto mas ha debido verse y tenerse presente.

Considerando: que está suficientemente comprobada la existencia del contrato de arrendamiento por el uso de aguas, entre el C. Sabino Maraver y el P. Ayuntamiento de Huamantla Juarez, no solo por los documentos fojas 14 á la 17 de estos autos, sino por la confesion que dicho Ayuntamiento estampó al rendir su informe justificado, en el cual aun copia del libro en que asienta sus contratos, el que tiene celebrado con el C. Sabino Maraver.

Que sin que sea materia de este juicio hacer la exacta clasificacion del contrato que existe entre el quejoso y el P. Ayuntamiento, el hecho justificado es la existencia de

un pacto que produce recíprocas prestaciones.

Que si bien es cierto que el P. Ayuntamiento tiene la obligacion como una de sus particulares atribuciones, de velar sobre los ramos de policía, de ornato y salubridad y debe procurar la mejor y mas conveniente distribucion de las aguas de la Ciudad, sin embargo, en el caso presente se considera no como una autoridad que discrecionalmente pudiera ejercer atribuciones que no estuvieran sometidas á otra autoridad, sino como una parte que con accion privada hace valer sus derechos y reclama el cumplimiento de recíprocas obligaciones.

Que en su calidad de una de dos partes contratantes, no ha pedido el P. Ayuntamiento de Huamantla, administrarse justicia por sí propio, privando al C. Sabino Maraver de las defensas que pudiera alegar ante la autoridad judicial.

Que por robustas y fundadas que fueran las acciones que asistieran al mismo P. cuerpo para pretender el desancio del contrato de arrendamiento que tiene celebrado con el quejoso, no puede por sí solo ejecutar el acto violento de privar á su contratante del agua de que estaba en posesion,

Que para la ejecucion de tapar el acueducto por donde recibia el C. Sabino Maraver, el agua en su establecimiento de baños, ha violado el P. Ayuntamiento de Huamantla, la garantía que otorga al hombre la Constitucion general de la República, en su art. 16 parte 1ª, puesto que estando dicho Maraver en posesion del uso del agua, no procedió mandamiento escrito de autoridad competente, que fundara y motivara la causa legal del procedimiento.

Que el mismo H. Ayuntamiento ha violado con la ejecucion del acto por que se ha pedido este amparo, la parte 2ª del art. 17 de la misma Constitucion general de la República, pues ha ejercido violencia para reclamar su derecho, sin ocurrir á los Tribunales que siempre están abiertos para administrar justicia.

Por tales consideraciones y con fundamento de los arts. 16 y 17 de la Constitución general de la República fecha 5 de Febrero de 1857, y de la fracción 1ª del art. 19 de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: La Justicia de la Union protege y ampara al C. Sabino Maraver, contra el acto que ejecutó el P. Ayuntamiento de Huamantla Juarez, privándolo violentamente del uso del agua que entraba en su establecimiento de baños. Notifíquese esta sentencia; sáquense las copias para la publicacion, y fecho, remítanse los autos con atenta comunicacion, á la Suprema Corte de los Estados Unidos Mexicanos para los efectos legales.

Así definitivamente juzgando lo decretó y firmó el C. Lic. Manuel María Sevane, primer suplente de Distrito en el Estado, encargado del despacho del Juzgado, por licencia de que disfrutaba el C. Juez propietario. Doy fé.—*Lic. Manuel María Sevane.*—*José M. Paredes.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, 13 de Abril de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por el C. Sabino Maraver, ante el Juzgado de Distrito del Estado de Tlaxcala, contra el Ayuntamiento de Huamantla Juarez que le despojó del uso de una merced de agua que disfrutaba por contrato celebrado entre el padre del quejoso y el mismo Ayuntamiento. Visto el informe de la autoridad responsable de este acto; lo pedido por el C. Promotor fiscal; la prueba rendida por el quejoso y todo lo demas que de autos consta.

Considerando: que existiendo un contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Huamantla y el C. Maraver para que este disfrutase de una merced de agua en los términos que en él constan, el Ayuntamiento estaba obligado á respetar ese contrato y reclamar tambien de su cumplimiento ante

TOMO VI.—PABTE II.

la autoridad judicial respectiva, y nunca despojar como lo hizo de una manera violenta á la otra parte con quien el contrato, haciendo para ello uso de su autoridad, con cuyo acto se ha infringido la garantía que reconoce el artículo 17 constitucional.

Con fundamento de este artículo, de los 16, 101 y 102 del mismo Pacto federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito del Estado de Tlaxcala que declaró, que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Sabino Maraver, contra el acto que ejecutó el Ayuntamiento de Huamantla Juarez, privándolo violentamente del uso de la agua que entraba en su establecimiento de baños.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Oastañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa,* secretario.

Es copia que certifico. México, 6 de Mayo de 1874.—*Alejo Gomez Eguiarte,* oficial mayor.